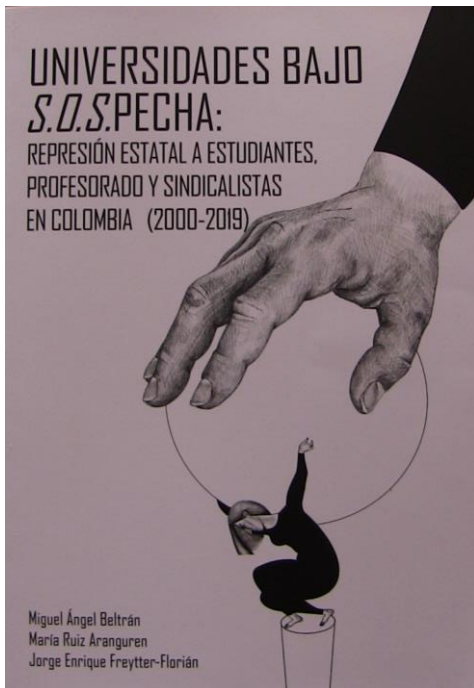


LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y EL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA*

Renán Vega Cantor



Se suele decir que la universidad pública es el reflejo directo de un país y de una sociedad, una afirmación que es indudablemente cierta para el caso de Colombia. Esto puede demostrarse en una forma relativamente fácil, acudiendo al análisis de los mecanismos propios de la violencia institucional, que podemos denominar simplemente *terrorismo de Estado*, que se ha impuesto en nuestro país como parte de un orden que pareciera inmutable, consolidado durante los últimos setenta años.

1

Dicho orden de naturaleza contra-insurgente, que se sustenta en un visceral anti-comunismo y en la búsqueda permanente de un “enemigo interno” por parte de las clases dominantes y el Estado, busca preservar, mediante el uso generalizado de la violencia, la terrible desigualdad social que hace de Colombia uno de los países más injustos del mundo. Esto lo demuestra un dato elemental, dado a conocer a comienzos de 2018: el coeficiente Gini indica que Colombia, con un 0.53, es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Honduras (0.537), siendo el séptimo más desigual del planeta. Dichas cifras corresponden a estudios del Banco Mundial, una entidad que no genera sospechas de ser anti-capitalista o algo por el estilo.

Para mantener y ampliar la desigualdad estructural de la sociedad colombiana ha sido imprescindible el terrorismo de Estado, para acallar a aquellos que pudieran constituir un proyecto alternativo de sociedad y esbozaran algún tipo de redistribución de la riqueza rural y urbana. Contra quienes encarnan algún tipo de reivindicación social, que pueda rasguñar las fibras del poder establecido, se enfilan los mecanismos del terrorismo de Estado, con todas

* Prólogo al libro *Universidades bajo S.O.S. pecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)*, Miguel Ángel Beltrán, María Ruíz Aranguren y Jorge Enrique Freyter-Florián, Universidad del País Vasco, Bogotá, 2019, 336 páginas.

sus perversas modalidades, que incluyen el asesinato, la desaparición forzada, la tortura, el encarcelamiento, la persecución, la calumnia oficial y mediática, el exilio forzoso, el desplazamiento... Cuando, por circunstancias coyunturales no se aplican estos mecanismos en forma directa por el Estado, éste se ha valido de los grupos para-institucionales, como desde comienzos de la década de 1960 lo recomendó una misión de expertos militares de los Estados Unidos, lo cual se puso en práctica de manera casi inmediata. De esa forma, se creó un monstruo asesino que ha cometido crímenes atroces, justificados a nombre de la defensa de la propiedad privada y de los “colombianos de bien” que hacen patria, un apelativo para bautizar sus tierras y riquezas.

Se pueden recordar algunos de los mecanismos de terror empleados por esos grupos para-estatales para matar, con una sevicia aterradora, a los guerrilleros o a los que eran considerados como sus auxiliares: la motosierra para trozarlos vivos; los caimanes para devorarlos sin dejar rastro; el machete para mochar cabezas y luego jugar fútbol con ellas; las hormigas para que devoraran a seres humanos que habían sido encadenados y metidos en un hueco: “A los informantes y guerrilleros los ponemos allí con panela. Duran tres días mientras se los comen las hormigas”, como contó uno de los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad¹. Esta no es una violencia ciega, sin norte ni dirección, porque tiene un perfecto sello de clase: a quienes pretendan cuestionar el orden establecido hay que eliminarlos, recurriendo al terror, para demostrar de todo lo que son capaces los verdaderos dueños de este país.

Claro, como ha sucedido en estos días, a aquellos de las propias clases dominantes que se vean como un potencial peligro, no tanto por lo que representen, sino por lo que puedan saber, también se les puede llegar a matar de manera excepcional, pero contra ellos no se emplea los métodos horrendos descritos más arriba, sino que se usa el cianuro. Motosierra contra unos (los pobres y “enemigos”) y cianuro contra otros (los ricos “desviados”), es el lema que guía la práctica criminal de las clases dominantes de Colombia.

2

El terrorismo de Estado en Colombia no hubiera podido sobrevivir por tantas décadas si no estuviera acompañado de la impunidad absoluta, que garantiza que los criminales de cuello blanco nunca sean molestados por su atroz prontuario, que avergonzaría a un individuo como Al capone. Para mencionar un ejemplo reciente, solo baste constatar el procedimiento mafioso de un ex presidente de la República, y ahora flamante senador, que a diario comete innumerables delitos –cuyas pruebas son contundentes– para lanzar injurias, condenas, operar en alianza abierta con figuras del crimen organizado y que goza de completa impunidad. Esa misma impunidad cobija al Fiscal General de la Nación, un tenebroso abogado de los grupos económicos dominantes de Colombia y con nexos con empresas transnacionales, que está involucrado en actos de corrupción y ahora su nombre se vincula con la “extraña” muerte de dos de miembros de la familia Pizano.

El cinismo alcanza tales dimensiones, que hasta los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado –un pilar central del Terrorismo de Estado– ahora nos dicen que fueron víctimas del conflicto y debe reconocérseles como tal, porque 200 mil de sus miembros sufrieron durante la guerra interna. Cabriolas de ese estilo solo pueden ser producto de la vergonzosa impunidad, que hace que los victimarios se presenten como víctimas, en un intento de legitimar sus crímenes, mantener sus privilegios y negar su participación activa en cientos de masacres, alianzas y financiamiento de grupos paramilitares, desapariciones forzadas, torturas y otras prácticas criminales. Al respecto, un ejemplo emblemático es el del Palacio de

¹. María McFarland Sánchez-Moreno, *Aquí no ha habido muertos- Una historia de asesinato y negación en Colombia*, Editorial Planeta, Bogotá, 2018, p. 145.

Justicia, arrasado a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas en noviembre de 1985, en un hecho que ha quedado en la impunidad, aunque poco a poco se haya ido estableciendo la verdad de lo que sucedió en su interior. Pero lo del Palacio de Justicia tiene un efecto más amplio de lo sucedido hace 33 años, efecto que se proyecta hasta nuestros días, y del cual se desprende la facilidad de maniobra de que gozan los criminales oficiales:

Fue después de la tragedia del Palacio que el fenómeno de la tolerancia de lo intolerable se generalizó; fue cuando la totalidad del exterminio de un partido político (la Unión Patriótica) fue aceptado por los colombianos, sin que la mayoría de ellos se molestara por la evidente complicidad oficial que esto significaba; fue luego de la tragedia del Palacio de Justicia que el fenómeno paramilitar, impulsados desde las oficinas de altos mandos militares, fue acatado y difundido por los cuarteles y las gobernaciones del país, convirtiendo extensos territorios en un cementerio de masacres olvidadas [...] ¿por qué es este el país donde se libra la “guerra sucia” más brutal del continente contra la oposición civil e inerme de un gobierno que se llama “democrático”?²

Como una variante del terrorismo estatal, derivado de los hechos del Palacio de Justicia, deben señalarse los asesinatos de Estado de jóvenes indefensos y desarmados, que fueron bautizados con el eufemismo de “falsos positivos”. El asunto es tan grave que hasta una entidad al servicio del imperialismo estadounidense, como lo es Human Right Watch, ha afirmado que

Los “falsos positivos” representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables. No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares³.

Estos crímenes de jóvenes, pobres e indefensos, que han sido impulsados desde las más altas esferas del Estado (Presidentes, Ministros de Defensa, Comandantes militares...), se replican desde hace décadas porque los responsables e impulsores no tienen quien los ronde.

3

La impunidad del terrorismo de Estado a la colombiana se apoya en algunos mitos, que se repiten a diario, como si fueran verdades indiscutibles, entre ellas que somos la “democracia” más antigua y estable de América Latina y, a partir de la misma, se sostiene que este país es un remanso de paz, que aquí no ha habido muertos y nunca pasa nada, que este es el “mejor vivero del mundo”, puesto que los colombianos somos los seres más felices del planeta y sus alrededores.

Quienes se han encargado de legitimar estas falacias son, en primer lugar, los medios de desinformación masiva, que pertenecen a los dueños de este país. Estos son un mecanismo activo del terrorismo de Estado que se encarga de acusar a los que son vistos como “enemigos” y “terroristas”, que son sometidos al escarnio público y subsecuente persecución, pero también tienen el papel de lavar la imagen del terrorismo oficial, para presentar sus acciones criminales como legítimas a nombre de un supuesto “Estado de Derecho”. En su papel de inventar enemigos, gran parte de los periodistas de los medios de desinformación actúan como sicarios con micrófono, cuyas actuaciones no se diferencian mucho de los

². Ana Carrigan, *El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana*, Icono, Bogotá, 2010, p. 342.

³. Sergio Gómez Maseri, “180 batallones investigados por falsos positivos”: Human Rights Watch”, *El Tiempo*, junio 23 de 2015.

sicarios que andan en moto y acribillan a seres indefensos. Son incluso sicarios más peligrosos, porque aparecen como “formadores de opinión” y representantes de la “libertad de prensa”, que en Colombia quiere decir “libertad de empresa”, como lo demuestran los casos de RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador, Semana, entre otros.

Cierto tipo de academia es el otro soporte intelectual del Terrorismo de Estado que desde diversos lugares, entre ellos las universidades públicas, pontifica sobre las bondades del “Estado de Derecho” que existiría en Colombia, y también lanzan anatemas y condenas contra todos aquellos que no se inscriben dentro de sus lógicas neoliberales y pro-capitalistas, que les genera jugosas ganancias, mediante la organización de ONG, consultoras o asesoras del Estado, del cual reciben cuantiosos contratos, y de la misma forma laboran para la USAID y otras agencias de los Estados Unidos.

4

Una de las funciones centrales de los agentes ideológicos e intelectuales del Terrorismo de Estado radica, aparte de mentir y desfigurar los hechos, en reescribir la historia, construyendo un relato funcional a las clases dominantes, que se basa en el principio elemental de negar sus crímenes. Esto se viene haciendo en Colombia desde la Masacre de las Bananeras, en 1928. Desde ese momento se repite por todos los medios: no ha pasado nada, no ha habido muertos ni masacres, ese es un invento de gentes interesadas en desprestigiar al país, que son enemigos naturales del mismo y responden a intereses foráneos, del comunismo internacional para ser más concretos. Eso se dijo con respecto a la masacre de obreros en Santa Bárbara en 1963, al Paro Cívico de 1977, al Palacio de Justicia, a las cientos de masacres paramilitares, a los “falsos positivos” e incluso en este mismo momento el Fiscal General de la Nación sostiene que es víctima de una “conjura internacional” cuando se denuncian sus nexos con los grandes poderes y su directa responsabilidad en actos de corrupción y su sospechosa actuación en el caso de dos muertos de apellido ilustre. Ante eso los medios, que sirven a los grandes grupos económicos (Sarmiento Angulo, Santodomingo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño) miran para otro lado en el mejor de los casos, pero normalmente lavan la imagen del Fiscal, que solo es un mandadero de alto nivel del grupo Aval. Eso mismo es lo que se hace con respecto al pasado reciente, como cuando se dice, para mencionar un ejemplo, que la masacre de las bananeras nunca existió sino que fue producto de la imaginación desbordada de Gabriel García Márquez.

Esta es la lógica negacionista que se está aplicando hoy con relación a los múltiples crímenes del terrorismo de Estado y de las clases dominantes, partiendo del supuesto que acusar a los prohombres del Estado y del mundo empresarial por su participación directa e indirecta en diversos crímenes en las últimas décadas significaría mancillar sus nombres y su pulcra hoja de vida (de muerte, sería mejor decir).

5

Cualquier lector desprevenido podría pensar que lo que estamos diciendo forma parte del pasado de Colombia, porque ahora, luego del acuerdo entre el Estado y las Farc, las cosas han cambiado. Esa es pura apariencia, porque aparte de la desmovilización y desarme de ese movimiento insurgente, en nada se tocó el terrorismo de Estado, en ninguno de sus pilares (ni el militar, ni el judicial, ni el mediático). Antes por el contrario, ese Terrorismo salió fortalecido y legitimado, y sigue actuando a sus anchas. Los hechos de los últimos meses son contundentes al respecto, algunos de los cuales pueden ser enumerados en forma desordenada: la oleada de asesinatos de líderes sociales, sindicalistas, dirigentes cívicos, populares y campesinos no se ha detenido con motivo de la firma de los acuerdos de La Habana; esa oleada de asesinatos ha mantenido el ritmo de los últimos 35 años; a la lista de asesinados hay que agregar un centenar de antiguos miembros de las Farc que han sido ultimados, junto con sus familiares; a los antiguos guerrilleros no se les han dado garantías

para hacer política sin armas y tampoco se han propiciado condiciones de subsistencia viables y dignas, y por eso las antiguas zonas están desoladas, ya que la mayor parte de guerrilleros se han marchado; en las antiguas zonas de influencia de las Farc dominan los nuevos grupos paramilitares; los acuerdos de 2016 quedaron en el papel y de los mismos poco o casi nada es lo que se ha cumplido (en cuanto a tierras, erradicación de cultivos de uso ilícito, apoyo a las regiones asoladas por el conflicto...); las selvas y bosques del sur del país que se mantuvieron relativamente protegidas hasta hace poco tiempo, en virtud del conflicto armado, quedaron a merced de las multinacionales, terratenientes y empresarios locales que las están destruyendo con una rapidez que asombra. Con referencia a esto último una información es ilustrativa:

El país perdió casi 220.000 hectáreas de bosque en 2017. Es como si del mapa de Colombia desaparecieran Bogotá y Medellín. Usurpación de tierras, expansión de la frontera agropecuaria, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y obras viales tienen en jaque los ecosistemas colombianos. La firma del acuerdo de paz con las Farc ha abierto puertas para la investigación científica, pero también para un impresionante deterioro ambiental⁴.

Al mismo tiempo, los medios de desinformación de masas, envalentonados por lo que consideran un triunfo del Estado y de sus fuerzas armadas, con más vehemencia que antes mienten, calumnian, urden montajes contra los “enemigos”, sin que eso exprese algún cambio respecto a la época en que existían las Farc. Esos medios siguen siendo uno de los soportes fundamentales del terrorismo de Estado, hasta el punto que ahora funcionan como jueces que dictan condenas, como lo demuestra el montaje contra el ex líder guerrillero Jesús Santrich.

Para completar, la Fiscalía, encabezada por un empleado del grupo Aval, e interesado en defender los intereses de los sectores empresariales, responsables directos de la guerra en Colombia, se ha dado a la tarea (con éxito hay que reconocerlo) de desmontar lo poco que pudiera quedar de los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón, hasta hacer trizas a la JEP, y hacer montajes burdos, pero con gran repercusión pública, contra supuestos testaferros de la antigua insurgencia.

Por todo esto, el terrorismo de Estado en Colombia no solo quedó incólume, sino que tiene nuevos bríos y las manos libres para perseguir a los nuevos enemigos, entre los cuales se encuentran los estudiantes y algunos profesores, sobre todo de las universidades públicas. Esto se inscribe en una política más amplia de persecución a los jóvenes pobres, que bien podemos catalogar de *juvenicidio*.

6

Sí, puede hablarse de un juvenicidio, porque los jóvenes pobres y humildes, tanto del campo como de las ciudades, se encuentran entre los sectores más vulnerables al terrorismo de Estado y a las políticas neoliberales. Es un juvenicidio de clase, porque nunca es asesinado en un “falso positivo” un hijo de alguna familia de prestancia, siempre los muertos y desaparecidos son jóvenes pobres. Diez mil de ellos fueron asesinados en forma cobarde por el Ejército para presentar resultados favorables en la guerra (solo entre 2002-2010), y conseguir recompensas y condecoraciones, en una expresión de lo que se llama *body count*, es decir, medir el costo de la guerra por la sangre derramada entre los que se consideran del bando contrario. Dicha sangre en este país se sabe de donde proviene, de los pobres y desvalidos.

⁴ La paradoja de la paz: cuatro historias de destrucción ambiental tras el acuerdo con las Farc, julio 26 de 2018, en <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-despues-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc/41088>

Y esos jóvenes siguen siendo asesinados en estos mismos instantes, como lo evidencia el crimen de tres jóvenes en Medellín que fueron subidos a un taxi el 18 de noviembre, y sus cuerpos aparecieron en una fosa común dos meses después. ¿Cómo puede entenderse este tipo de acciones criminales, que son cotidianas en el país, y que afectan a los jóvenes pobres? No es casual, ni mucho menos, puesto que está inscrita en esa guerra no declarada contra los jóvenes de origen plebeyo, una guerra que combina diversas formas de violencia. Por una parte, la violencia institucional, que mediante la privatización de la salud, de la educación, de la cultura, convierte a millones de niños y jóvenes en analfabetos y enfermos, carentes de cualquier posibilidad de supervivencia, o de conseguir un empleo, lo cual conduce a muchos de ellos a la delincuencia. Por otra parte, contra ellos se ejerce la violencia directa como la ejemplifican los asesinatos de Estado, conocidos como “falsos positivos”. En esa medida, no extraña que también se persiga a los jóvenes estudiantes de las universidades públicas, que tienen alguna actitud crítica y no se resignan a ser pasivos y obedientes.

7

Durante los últimos 70 años la Universidad Pública no ha estado al margen de lo que ha sucedido en Colombia y ha sido afectada directamente por el Terrorismo de Estado. Al respecto es bueno recordar lo sucedido después del 9 de abril, cuando Gerardo Molina fue destituido y fueron expulsados de esa universidad los profesores críticos, por el hecho de ser tildados de comunistas, aunque muchos de ellos fueran liberales. Hoy esa situación poco ha cambiado.

El trasfondo del ataque del Estado y las clases dominantes contra la universidad pública en particular, y la educación pública en general, tiene como objetivo mantener sumidos en la ignorancia a las vastas mayorías de Colombia. Ese ataque se ha acentuado en las últimas décadas con el impulso de políticas privatizadoras y mercantiles, que han convertido a las universidades públicas en empresas que venden servicios educativos, a sus profesores en tenderos de ideas y a los estudiantes en clientes. Ese proyecto no sólo ha sido impulsado desde fuera de las instituciones universitarias, sino que ha contado con el respaldo activo de importantes sectores de la academia, si recordamos las nefastas rectorías de Marco Palacios y Antanas Mockus en la Universidad Nacional, que contaron con el apoyo de un grupo significativo de profesores.

Entre paréntesis, el verdadero objetivo de quienes han convertido a la universidad en un negocio se basa en supuestos similares a los que tiene Jair Bolsonaro, el ultra-derechista que acaba de ser elegido como presidente de Brasil. Para este individuo “la escuela es el lugar donde se aprende Física, Matemáticas, Química... para hacer que en el futuro tengamos un buen empleado, un buen patrón y un buen liberal. Ese es el objetivo de la educación”⁵. Por ello, deben desaparecer de los programas educativos las humanidades, las ciencias sociales, el arte y lo que contribuya a formar integralmente a los seres humanos, puesto que según la mente obtusa de ese neofascista, esos conocimientos son inútiles y sólo sirven para adoctrinar en teoría marxista y generar una “sexualización precoz” que mina los valores tradicionales de la familia.

Estas posturas no están lejos del proyecto educativo de las clases dominantes de Colombia, como se ha venido impulsando en las últimas décadas, que ha transformado las universidades en centros politécnicos. Tampoco sorprende que haya sido designado como Ministro de Educación en Brasil un individuo que nació en Colombia, de extrema derecha, y que algunos profesores de ese país han catalogado como un ayatola cristiano. Y no hay duda que lo es, ya

⁵. En Brasil, Bolsonaro nombra ministro de Educación a un filósofo colombiano, disponible en: <http://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina/ricardo-velez-el-filosofo-colombiano-que-es-nuevo-ministro-de-educacion-de-brasil-DE9699757>

que “el ultraconservador y evangélico colombiano Ricardo Vélez Rodríguez se define como promonárquico en su blog y propone que se celebre el golpe militar de 1964”. Cree que la educación debe reforzar los valores tradicionales de la sociedad, que son los de “la familia, la religión, la ciudadanía, en suma: el patriotismo”. Aparte de todo va implantar en las escuelas un Consejo de Ética que vele “por la rectitud moral de los alumnos”.⁶ Seguramente, las clases dominantes de Colombia, querrán tener un ejemplar de esta calaña para regir los destinos de la educación colombiana. En realidad, muchos de los funcionarios de los últimos gobiernos de Colombia no están lejos de ese espécimen criollo de exportación, como lo demuestra Alejandro Ordoñez, un cruzado medieval que quema libros, y ha sido designado por Iván Duque como Embajador de Colombia ante la OEA.

Volviendo a nuestro tema principal, la conversión mercantil de las universidades públicas no ha logrado eliminar la labor independiente y autónoma de sectores de profesores y estudiantes, que reflexionan sobre los problemas del país y no se resignan a consumir mercancías educativas. Por dicha circunstancia, se mantiene el asedio y persecución del Terrorismo de Estado con sus múltiples tentáculos (armado, judicial, mediático...), lo que ha dado como resultado que en los últimos años, al tiempo que se mercantiliza la universidad pública, aumenten las presiones (que cuentan con colaboradores internos en las universidades) para perseguir y criminalizar a los profesores y estudiantes que se niegan a reconocer la falacia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que ese tipo de universidad es lo mejor que nos podría haber pasado, para nuestro bien y el del país.

Contra esos miembros irredentos de la comunidad universitaria, el Estado, con el sostén de falsimedia, libra una batalla abierta y soterrada, recurriendo a la violencia física directa y a la violencia simbólica, como lo demuestran diversos hechos de encarcelamiento, acoso, persecución, maltrato, calumnias y numerosas infamias urdidas contra profesores y estudiantes, acciones que han contado con el respaldo, hay que decirlo con indignación, de un gran número de miembros de la comunidad universitaria, que al igual que el bloque de poder contra-insurgente considera como “enemigos” a los que son perseguidos por ese Estado terrorista, porque sencillamente no se acoplan con el modelo de universidad empresarial de tipo neoliberal, que simultáneamente es neoconservadora en términos políticos.

8

Los diversos mecanismos de esa persecución contra la universidad pública (porque atacando a unos se ataca a toda la institución, aunque eso no lo reconozcan los acomodados y los que se lucran con la emergencia de la universidad empresarial) son descritos con detalles en el informe *Universidades bajo S.O.S. pecha*, que el lector tiene entre manos. En estas páginas se recogen los hechos más sonados del terrorismo de Estado, operando *en y contra* las universidades públicas, y *contra* sus estudiantes y profesores críticos. En este estudio se acumulan los múltiples agravios que hemos sufrido en los últimos quince años diversos sectores de la universidad pública, cuyos profesores y estudiantes han sido perseguidos, encarcelados, secuestrados, soportado montajes judiciales, criminalizados, calumniados, condenados sin pruebas por falsimedia y sus sicarios con micrófono, obligados a irse de sus regiones o del país...

Jóvenes colombianos, hombres y mujeres, pobres y humildes que han llegado con gran esfuerzo a la universidad, han terminado encerrados en las cárceles de diversas ciudades del país, sometidos a presiones y chantajes, víctimas de montajes, que son realizados por personajes de los servicios secretos del Estado que se infiltran con premeditación y alevosía,

⁶. Un ‘ayatollah’ dirigirá la educación en el Brasil de Bolsonaro. Disponible en: <https://larepublica.pe/mundo/1363757-ayatollah-dirigira-educacion-brasil-bolsonaro>

con el fin de obtener ascensos y prebendas (un comportamiento que es típico de los “falsos positivos” judiciales) en los campus universitarios. Asimismo, se fabrican testigos falsos para condenar a jóvenes universitarios, que son mantenidos encerrados sin juicio, y son condenados con antelación por periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de televisión, inventando pruebas, como le sucedió al joven Mateo Gutiérrez, quien estuvo durante varios años en una prisión de Bogotá, con pruebas amañadas, que luego se demostraron falsas.

Este documento no solo denuncia esa persecución y acoso, sino que reivindica la oposición y resistencia que una parte de la comunidad universitaria efectúa desde las universidades y da cuenta de las historias de estudiantes, profesores y de sus familiares que han enfrentado, con valentía y dignidad, al terrorismo estatal, y demostrando que en las universidades públicas hay hombres y mujeres, generalmente jóvenes, que piensan y luchan por otro país, decente, y no se ven representados en ese estercolero de injusticia y corrupción que es la Colombia actual.

Esos jóvenes de las universidades públicas son los mismos que hoy conducen el gran paro, que exige financiación adecuada, y con sus acciones reviven las grandes gestas de los estudiantes colombianos y latinoamericanos, en el año en que se cumple un siglo del grito de Córdoba, que resuena hasta nuestros días. Su eco nos llega nuevamente a través de rebeldía y desobediencia que encarnan, contra diversas formas de poder, entre ellas las de la academia tradicional y fosilizada, que en gran parte es cómplice de la mercantilización y conservadurismo de la universidad pública. En la senda de esa movilización y por defender otra forma de concebir la universidad (que no sea mercantil ni dominada por el “pensamiento único” de derecha) se ha escrito este informe, breve pero contundente, que nos advierte, por si se hubiese olvidado, que el terrorismo de Estado en Colombia no es cosa del pasado sino del presente y, como ha sido su característica histórica, tiene en la mira a la universidad pública con el objetivo de destruirla y con ello aniquilar uno de los últimos reductos democráticos que quedan en este país. Por eso, es que la tenemos que defender, para mantener un espacio de reflexión, de crítica y de acción política emancipadora.

Bogotá, diciembre 2 de 2018